



Consejo de Seguridad

Distr. general
21 de diciembre de 2012
Español
Original: inglés

Grupo de Trabajo sobre los niños y los conflictos armados

Conclusiones sobre la situación de los niños y el conflicto armado en Colombia

1. En su 33ª sesión, celebrada el 31 de mayo de 2012, el Grupo de Trabajo sobre los niños y los conflictos armados examinó el segundo informe del Secretario General acerca de los niños y el conflicto armado en Colombia (S/2012/171), relativo al período comprendido entre enero de 2009 y agosto de 2011 y que presentó la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados. También hizo uso de la palabra en el Grupo de Trabajo un representante del Gobierno de Colombia ante las Naciones Unidas.
2. Los miembros del Grupo de Trabajo expresaron satisfacción por el informe del Secretario General, presentado de conformidad con la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad, y tomaron nota del análisis y las recomendaciones que figuraban en él.
3. Los miembros del Grupo de Trabajo reafirmaron que era importante que las partes en los conflictos armados cumplieran sus obligaciones internacionales relativas a la protección de los niños en los conflictos armados, incluidas las enunciadas en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional II, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de esta Convención sobre la participación de niños en los conflictos armados.
4. Los miembros observaron con profunda preocupación que grupos armados, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), seguían cometiendo transgresiones y abusos contra niños.
5. Los miembros expresaron satisfacción por las medidas tomadas por el Gobierno de Colombia para proteger a los niños, especialmente la preparación y ejecución de la “política pública para la prevención del reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados ilegales” (véase COMPES 3673), el sistema de alertas tempranas establecido por la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños por grupos armados ilegales y puso de relieve la importancia de aplicar en mayor



medida planteamientos centrados en la víctima. Los miembros instaron a una mayor cooperación entre las Naciones Unidas y el Gobierno.

6. Los miembros alentaron al Gobierno de Colombia a redoblar los esfuerzos por luchar contra la impunidad de las transgresiones y los abusos contra niños en el conflicto armado investigando los casos y procesando a los autores y a que siguiera haciendo todo lo posible por reintegrar y rehabilitar a los niños antes asociados con grupos armados.

7. El representante de Colombia hizo una declaración. Los miembros del Grupo de Trabajo aceptaron, a título excepcional, la solicitud de un miembro del Grupo de que su declaración fuese adjuntada como anexo a las presentes conclusiones, sin perjuicio del examen por el Grupo de Trabajo de otras situaciones relativas a los niños y el conflicto armado (véase el anexo).

8. Con sujeción al derecho internacional aplicable y las resoluciones del Consejo de Seguridad pertinentes, entre ellas las resoluciones 1612 (2005), 1882 (2009) y 1998 (2011), y de conformidad con ellos, el Grupo de Trabajo decidió tomar la medida que se indica a continuación.

Declaración pública del Presidente del Grupo de Trabajo

9. El Grupo de Trabajo decidió hacer una declaración pública dirigida a las partes en el conflicto armado en Colombia que figuraban en el anexo II del informe anual del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado (véase A/66/782-S/2012/261) en que, recordando que la resolución 1612 (2005) no apuntaba a determinar en derecho si las situaciones a que se hacía referencia en los informes del Secretario General constituían o no conflictos armados en el contexto de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales ni prejuzgaba la condición jurídica de las partes no estatales involucradas en esas situaciones:

a) Señala a su atención el hecho de que el Consejo de Seguridad ha recibido un informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia (S/2012/171) en que se detallan transgresiones y abusos cometidos contra niños en el contexto del conflicto armado en Colombia en contravención del derecho internacional aplicable;

b) Condenando resueltamente a las FARC-EP y al ELN por seguir cometiendo las seis transgresiones graves contra los niños en Colombia, consistentes en el reclutamiento y la utilización de niños, muertes y mutilaciones, violaciones y actos de violencia sexual, secuestros, ataques contra escuelas y hospitales y denegación de acceso humanitario, les insta a que pongan término de inmediato a esas transgresiones y abusos y les exhorta a respetar el derecho internacional humanitario, cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos armados y llevar a la práctica las anteriores conclusiones del Grupo de Trabajo sobre los niños y los conflictos armados respecto de Colombia (S/AC.51/2010/3);

c) Exige que esos grupos armados:

i) Pongan término de inmediato al reclutamiento y la utilización de niños y dejen libres incondicionalmente a todos los niños que se encuentren en sus filas;

- ii) Pongan término a la práctica de la violación y otras formas de violencia sexual contra los niños, en particular contra las niñas asociadas a esos grupos armados;
 - iii) Pongan término de inmediato a las medidas que obstan para que los niños tengan acceso en condiciones de seguridad a servicios de educación y salud, como los atentados o amenazas de atentados en contravención del derecho internacional aplicable contra escuelas u hospitales y contra personas protegidas asociadas a ellos;
 - iv) Permitan el acceso humanitario sin trabas y en condiciones de seguridad y se abstengan de prohibir la libre circulación de bienes y personas; a este respecto, los exhortan a cumplir plenamente las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario aplicable y a respetar la labor realizada por los miembros de organizaciones humanitarias que ofrecen asistencia y protección a los niños afectados por el conflicto armado;
 - v) Pongan término a la utilización de minas terrestres antipersonal y otros artefactos explosivos en contravención del derecho internacional aplicable y remuevan los artefactos sin explotar a fin de no causar muertes o mutilaciones a niños y proporcionen toda la información necesaria para facilitar la remoción de las minas;
 - vi) Pongan de inmediato en libertad a todos los niños secuestrados, faciliten su retorno a sus familias y comunidades y tomen todas las medidas necesarias para poner término a los secuestros;
- d) Pide a los grupos armados enumerados en el anexo II del informe anual del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados (A/66/782-S/2012/261) que cumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario en relación con la protección de los niños en el conflicto armado y que se reiteran en la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad y alienta a las Naciones Unidas y al Gobierno de Colombia a colaborar para determinar qué otras medidas se pueden tomar para hacer frente a las transgresiones que cometen esos grupos contra los niños;
- e) Destaca que la preparación y la plena ejecución de planes de acción de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad 1539 (2004), 1612 (2005), 1882 (2009) y 1998 (2011), verificadas por el equipo de tareas de las Naciones Unidas en el país para la supervisión y la presentación de informes, constituye un paso importante para que una parte en el conflicto armado sea excluida de los anexos del informe anual del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, deplora profundamente que se haya avanzado poco en la tarea de separar en forma efectiva y sistemática a los niños de los grupos armados de Colombia y recalca que el diálogo que se entable en el marco del mecanismo de supervisión y presentación de informes en Colombia por entidades de las Naciones Unidas y grupos armados a fin de asegurar la protección de los niños debe tener lugar en estrecha consulta con el Gobierno de Colombia y con el consentimiento de este de conformidad con el mandato del equipo de tareas de las Naciones Unidas en el país encargado de la supervisión y la presentación de informes respecto de Colombia.

Recomendaciones al Consejo de Seguridad

10. El Grupo de Trabajo formuló las siguientes recomendaciones al Consejo de Seguridad:

Carta al Gobierno de Colombia

a) *Recordando* las conclusiones anteriores del Grupo de Trabajo sobre los niños y el conflicto armado en Colombia (S/AC.51/2010/3);

b) *Encomia* los progresos realizados por el Gobierno en la tarea de prevenir el reclutamiento y la utilización de niños en contravención del derecho internacional aplicable y de tomar medidas para hacerle frente, con inclusión de la preparación de un documento marco sobre la prevención del reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados ilegales (CONPES 3673) y le insta a seguir aumentando la coordinación, repercusión y sostenibilidad de sus iniciativas para proteger al niño, especialmente a través de la aplicación amplia de esa política con respecto a los niños afectados por el conflicto armado, entre ellos los niños de origen afro colombiano e indígena;

c) *Observa con satisfacción* las actividades que ha realizado el Gobierno para atender a las necesidades de los niños separados de grupos armados, entre ellas las destinadas a promover la reunificación, la protección y el cuidado de la familia y el apoyo de la reintegración de todos los niños, y le alienta a seguir redoblando sus esfuerzos y cerciorarse de que los niños afectados sean tratados fundamentalmente como víctimas y no como perpetradores;

d) *Tomando nota* de la labor realizada por el Gobierno para combatir la impunidad y destacando la importancia de someter a la acción de la justicia a los autores de todas las transgresiones y abusos contra niños en el conflicto armado, insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos en ese sentido mediante, entre otras cosas, la investigación y el procesamiento oportunos, rigurosos y sistemáticos y alienta también al Gobierno a que se proteja efectivamente a los niños víctimas y testigos y se den reparaciones cuando proceda;

e) *Encomia* la labor realizada para adoptar e instituir una política de tolerancia cero respecto de la explotación y la violencia sexuales y cerciorarse de que las fuerzas militares de Colombia la pongan en práctica y observa que hay que hacer absolutamente todo lo posible para prevenir esos actos en el contexto del conflicto armado y que, cuando tienen lugar, es preciso tomar medidas oportunas para investigar, procesar y sancionar a quienes sean declarados culpables de ellos, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas;

f) *Toma nota con reconocimiento* de que la legislación vigente en Colombia prohíbe la utilización de niños para fines de inteligencia militar, exige que los niños separados de grupos armados sean entregados a servicios civiles de protección de la infancia a más tardar dentro de las 36 horas siguientes al momento en que quedan bajo la custodia del Estado e insta al Gobierno a cerciorarse de que las fuerzas militares de Colombia cumplan estrictamente estas disposiciones;

g) *Reconoce* que la legislación vigente en Colombia prohíbe la participación de niños en actividades civiles-militares y exhorta al Gobierno a que siga cerciorándose de que las fuerzas militares cumplan plenamente esa legislación y eviten la participación de niños en actividades de esa índole;

h) *Invita* al Gobierno a que siga cerciorándose de que las autoridades competentes del Estado respondan en forma adecuada y oportuna a los informes de riesgo emitido por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia de manera de prevenir violaciones graves contra los niños en el contexto del conflicto armado;

i) *Observa con satisfacción* el programa integrado de actividades relativas a las minas que lleva a cabo el Gobierno y apunta a proporcionar la atención debida a los niños que son víctimas y a impartir educación sobre el peligro que significan las minas, especialmente para los niños y sus familias, en las zonas más afectadas y destaca la importancia de redoblar los esfuerzos en esta materia, alentando además al Gobierno a seguir cerciorándose de que las operaciones humanitarias de remoción de minas se realicen de conformidad con el derecho internacional aplicable;

j) *Exhorta* al Gobierno a redoblar los esfuerzos en el marco de su planteamiento integral de la prevención del desplazamiento de niños y la protección de los niños desplazados en el contexto del conflicto armado mediante la aplicación de programas que hagan frente a las causas del desplazamiento, como el programa “Mis derechos primero”;

k) *Insta* al Gobierno a seguir cumpliendo las obligaciones que le impone la Convención sobre los Derechos del Niño y, a este respecto, recuerda las recomendaciones enunciadas en las anteriores conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Colombia (S/AC.51/2010/3);

l) *Destaca* la importancia de que el Gobierno y los Copresidentes del mecanismo de vigilancia y prestación de informes del MRM intercambien información periódicamente, así como de que haya una continua comunicación entre el Gobierno y la Representante Especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados a fin de prevenir transgresiones contra los niños en el conflicto armado, actuar en forma efectiva y oportuna respecto de las que se hayan cometido y obtener del sistema de las Naciones Unidas apoyo para la creación de capacidad;

m) *Considerando* que la paz es el mejor medio de proteger al niño, exhorta al Gobierno a que trate de llegar a una solución pacífica del conflicto e incluya en ella disposiciones que apunten expresamente a proteger a los niños en cualquier acuerdo de paz que se celebre en el futuro.

Adopción de medidas por el Grupo de Trabajo

11. El Grupo de Trabajo decidió además que el Presidente enviara cartas:

Al Banco Mundial y los donantes en que

Les *invitara* a prestar apoyo adicional a los programas y las iniciativas nacionales que apunten a proteger a los niños afectados por el conflicto armado, actividades de prevención entre ellas, y a las actividades e iniciativas para proteger al niño que realicen o emprendan organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, de manera de reforzar la creación de capacidad nacional y reforzar a las instituciones nacionales competentes y sus programas.

Anexo*

Statement by Fernando Alzate, Deputy Permanent Representative of Colombia to the United Nations

Presentation of the report of the Secretary-General on children and armed conflict in Colombia to the Working Group on Children and Armed Conflict (S/2012/171)

New York, 31 May 2012

Mr. Chairman,

Members of the Security Council Working Group,

Madam Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict,

Director of Emergency Programs of the United Nations Children's Fund.

I would like to thank Ambassador Peter Wittig, in his capacity as Chairman of the Security Council Working Group, for convening this meeting and for giving us the opportunity to present the comments of the Government of Colombia to the report on children and armed conflict in Colombia (S/2012/171). In addition to this statement, Colombia will deliver a document with its observations on specific aspects of this report and would kindly request the Chair to circulate it among the members of the Working Group.

The Special Representative of the Secretary-General made a presentation of the report. In this context, we value the recognition made to the robust public policy framework existing in Colombia aimed at guaranteeing children the enjoyment of their rights and achieve their full development, as reflected in the National Development Plan of President Juan Manuel Santos.

Mr. Chairman,

Our Public Policy for the Prevention of Recruitment and Use of Children by illegal armed groups and criminal bands (CONPES 3673 of 2010) starts from the premise that the more guarantees, effective enjoyment and protective environments of their rights, the lower the risk of recruitment and use of children by the referred groups.

The set of programmes, projects and strategies executed at different Government levels strive to protect the living space of children; to counter forms of violence and exploitation exerted in their families, communities and society; to guarantee an appropriate, assertive, pertinent and efficient institutional offer at the national and territorial level; and to promote their recognition as bearers of rights in the referred environments.

We reaffirm the commitment of the Government of Colombia in achieving a decisive impact with permanent solutions to confront the challenges posed by our political and security situation, through the consolidation of the rule of law in all the national territory. This imperative corresponds to our constitutional and legal mandate and it is the resolute will of the Government and the people of Colombia

* Publicado sin revisión editorial y únicamente en el idioma en que fue formulada.

not to cease in the fulfillment of this responsibility. The accompaniment of robust security strategies is essential to reach all corners of the national territory, and in particular remote rural areas, in order to deliver public services in areas such as health, justice and education, among others.

In addition, the Ministry of Foreign Affairs established the programme “Comprehensive prevention plan: children with opportunities”, aimed at preventing and fighting against child recruitment. The objective is to generate protective environments and spaces that guarantee the development of children in a safe manner, by supporting educational, sports and cultural initiatives in their free time, contributing in this manner to the prevention of child recruitment by illegal armed groups in the municipalities with the highest risk of recruitment. To mobilize resources, contacts have been made with private-sector companies interested in pursuing social responsibility programmes. We also work with partners that have taken special interest in this initiative, some of which are members of this Council.

Mr. Chairman,

Colombia voluntarily accepted to participate in the monitoring and reporting mechanism with the purpose of promoting lasting solutions to the problems that children face because of the internal armed conflict.

In our interactions on the question of children and armed conflict, we have put special emphasis on the fact that when considering the situation in Colombia the members of the Working Group and the United Nations balance their analysis with objectivity, reasonableness and historic and context perspectives. We believe in national capacity-building as the axis of international cooperation, and we would like to see that the mechanism that we accepted voluntarily would deepen efforts and actions in that sense.

Our experience shows that an approach focused exclusively in naming and shaming, in United Nations parlance, is a one-size-fits-all mechanism that does not contribute to the objective and central motivation of the national Government to protect children against the abuses perpetrated by illegal armed groups.

We consider it convenient to have a more fluid and constant relation with the task force and to be able to share substantive information that will allow us to clarify situations or deepen the efficacy of the Government actions. For the above reasons, it is indispensable that the information on situations of risk or complaints be communicated to the Government as soon as possible, in order to take the necessary measures to guarantee the protection of children. In this the Government’s will is clear, manifest and decisive.

The best interest of the child demands that cooperation be enhanced as well as the capacity to respond by the State institutions in favor of children. This cannot be achieved if the flow of information is limited under considerations of confidentiality and neutrality.

We have also insisted that it is just natural that the Government can verify through its participation in the task force that the data contained in the report of the Secretary-General on the situation of children and armed conflict in Colombia be timely, objective, precise and reliable, as provided for in Security Council resolution 1612 (2005) and related resolutions.

We trust that the members of the Working Group shall take these considerations into account in due course.

Mr. Chairman,

Concerning the analysis presented in the report on the political and security situation in the country, it is important to make a precision that Colombia, according to its international commitments, continues to fight decisively the complex challenges posed by the world drug problem. Even though this problem and other forms of crime are perpetrated by illegal armed groups such as FARC and ELN, it is important to underline that other criminal bands involved in the illicit drug business should not be subject to consideration under the framework of resolution 1612 (2005).

The framework of the monitoring and reporting mechanism goes beyond the mandates of the Security Council when it starts documenting actions perpetrated by organizations characterized as criminal bands under the Palermo Convention on Transnational Organized Crime. These bands are not parties to the armed conflict, according to the Geneva Conventions, its Additional Protocols thereto and other relevant instruments of the international humanitarian law. As acknowledged by the Secretary-General of the Organization of American States, the objective of these bands is purely economic and not counterinsurgent.

Should the framework of resolution 1612 (2005) be extended to organized criminal bands, the monitoring and reporting mechanism would have to be applied in a universal manner in countless situations and geographic areas around the world.

Demanding that the instruments created by the United Nations act in strict compliance with their mandate does not limit the scope of protection of the rights that we are bound to defend as a country and as a Government, nor does it diminish our clear will to do it and to defend the rights of the children. On the contrary, this demand seeks to preserve the credibility of the Organization, the trust of its members in it, the coordination of multilateral actions, so as to avoid duplicity of functions, and international legality.

The Government of Colombia is committed to the investigation and punishment of those responsible for criminal actions conducted by these bands against children in Colombia.

Mr. Chairman,

From the Secretary-General's report on children and armed conflict in Colombia it is clear that the challenges that Colombia continues to face in this area originate in the persistent violations perpetrated by FARC and ELN. We have been reminded of this today in Mrs. Coomaraswamy's presentation.

For FARC and ELN, the grave violations included in the report are simply strategies of war: the recruitment and use of children; the attacks on towns, schools and hospitals; the use of anti-personnel mines that kill and maim; the threats against teachers and medical staff; the sexual violence, in particular in the case of girls recruited; the abductions. Concerning this latter violation, we take note that despite the fact that the report documents abductions by the parties listed in annex II, it does not make any recommendation in this regard.

The report also mentions cases in which the actions of the public force when combating illegal armed groups have resulted in situations of risk or in the death of children. These are regrettable cases that our security forces try to avoid to the maximum extent. Our responsibility as a Government is to reach, with the State institutions, all the national territory to consolidate the rule of law and to guarantee the human rights of all Colombians with emphasis on the protection of children and youth against illegal recruitment.

It is fundamental for Colombia that the United Nations and the members of the Working Group have the certainty that the Government keeps a zero-tolerance policy to human rights violations. The violations allegedly perpetrated by members of the public force are isolated and individual. They do not represent a policy of the State and do not respond to military instructions.

The existence of institutions that are more robust every day has allowed us to advance in the realizations of the rights of all citizens. This includes the strict application of the mechanisms to punish those who from the State could incur in individual actions that affect those rights.

Mr. Chairman,

As mentioned before, Colombia voluntarily accepted the monitoring and reporting mechanism. Some time ago, the Government agreed with the Office of the Special Representative of the Secretary-General on the terms of reference for the implementation of the mechanism in all the national territory, which include specific conditions for the establishment of dialogues between the United Nations and illegal armed groups.

We reiterate that signing plans of actions with the parties included in the annexes is an option that is clearly inadequate for the situation in Colombia and that any contact by the United Nations with FARC or ELN may only take place with the authorization of the national Government. This condition originates in the need to centralize any peace negotiation initiative, due to previous experiences; and it is based in the principle of national sovereignty, which being comprised in the Charter of the United Nations, must be respected in the implementation of the monitoring and reporting mechanism.

Governments are the ones who best know the circumstances on the ground, the conflict, its history, its development and variables. Thus, they must be taken into account when pursuing alternatives and ways to put an end to the grave violations subject to the monitoring and reporting by the mechanism.

This mechanism should consult the positions of the Governments and have them participate in its internal implementation, through an efficient consultation process, to adopt timely actions in favor of children and youth with the purpose of strengthening the institutional capacity of the State to tackle these problems.

Mr. Chairman,

The observations and recommendations contained in the report are being analysed and studied by the different agencies concerned with the protection and rehabilitation of children and youth. In applying the recommendations of the Working Group we will take into account those that are adequate to the national context and that contribute to improve the situation of children and adolescents affected by armed conflict.

The report highlights some of the activities of the Intersectoral Commission for the Prevention of Recruitment and Use of Children. This Commission, in particular its technical secretariat, has received valuable support by the United Nations, which we appreciate.

One of the recommendations of the report emphasizes that the separation of children from armed groups should be a matter of utmost priority in any dialogue with illegal armed groups. In this respect, I would like to reiterate, as stated by the President of the Republic, Dr. Juan Manuel Santos, and as it is documented in the report under consideration, that a precondition for any eventual peace process with FARC and/or ELN is that these groups abandon the recruitment of children and that they release the children in their ranks.

Colombia values highly the interaction with the representatives of the members of the Working Group and we appreciate the opportunity that we have been afforded to exchange ideas and to present our views on this topic, which is a priority for the national Government.

Everyone here wants to put an end to the recruitment of children and wants to strengthen the existing capacities to protect children and adolescents affected by armed conflict. Colombia believes that the best way to achieve this is through cooperation and remains committed to this work, within the framework of the principles and purposes of the Charter of the United Nations, ratified by all of us.

Thank you.
